IV. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPREMO

SAL: QUINTA

Sentencias

En Madrid a 3 de marzo de 1961: en el recurso contencioso-administrativo que en única instancia pende ante esta Sala de Resolución, interviniendo como parte demandante don Gamaniel Martínez Alvarez, mayor de edad, Maestro nacional, Abogado del Ilustre Colegio de esta capital, vecino y domiciliado en la misma, que ha actuado en su propio nombre y derecho, y como demandada la Administración General, representada y defendida por el Abogado del Estado, recurso interpuesto contra la Orden del Ministerio de Educación de 30 de junio de 1960, que dejó sin efecto el recurso de alzada que dedujo contra acuerdo de la Dirección General de Enseñanza Primaria de 9 de marzo de dicho año, que reconoció al demandante un solo quinquenio a partir del 12 de agosto de 1952, fecha en que reingresó en el Magisterio;

RESULTANDO que don Gamaniel Martínez Alvarez ingresó en el Magisterio Nacional en 27 de agosto de 1917, prestando servicio sin interrupción hasta el 28 de noviembre de 1940, que fué separado por depuración, resolviéndose por Orden ministerial de 15 de enero de 1952 expediente de revisión readmitiéndole al servicio activo, con la sanción de inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos y de confianza, disponiéndose por Orden de la Dirección General de Enseñanza Primaria de fecha 28 de octubre de dicho año que a efectos administrativos se considerasen como servicios prestados en la Escuela que desempeñaba a la fecha de su cese por separación el tiempo transcurrido desde la citada fecha de 28 de noviembre de 1940 al de su posesión en nueva Escuela que obtuviera su propiedad, que lo fué en 11 de agosto de 1952;

RESULTANDO que publicada la Ley de 23 de diciembre de 1959, la Delegación administrativa de Madrid incluyó al recurrente entre los que tenían derecho a disfrutar de un solo quinquenio, solicitando el hoy recurrente de la Dirección General de Enseñanza Primaria en escrito de 8 de febrero de 1960 que con efecto de primero de enero anterior se le acreditasen en nómina dos quinquenios; petición que fué denegada en 9 de marzo siguiente, interponiendo contra la denegación recurso de alzada don Gamaniel Martínez en 31 del citado mes de marzo recurso desestimado por el Ministerio en 30 de junio de 1960;

RESULTANDO que don Gamaniel Martínez presentó en el Registro General de este Tribunal Supremo, en 4 de noviembre de 1960, escrito interponiendo recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la Dirección General de Enseñanza Primaria, y contra el acuerdo ministerial antes citados, así como contra la Orden del Ministerio de Educación Nacional de 28 de diciembre de 1959, que reglamenta la Ley de 23 de diciembre de 1959, que establece el derecho a percibir de quinquenios a los Maestros nacionales, habiéndose admitido a trámite el recurso y publicándose en el «Boletín Oficial del Estado» el anuncio de su interposición; recibido el expediente se entregó a la parte recurrente para que formulase su demanda, lo que

hizo por escrito, en el que después de enumerar los hechos y los fundamentos de derecho, según estimó procedente, terminaba con la súplica de que se dictase sentencia, por la que se revoque y deje sin efecto la Orden del Ministerio de Educación Nacional de 30 de junio de 1960, recurrida, declarando que el recurrente tiene derecho a que se le abone desde primero de enero de 1960 dos quinquenios en la cuantía dispuesta por la mencionada Ley;

RESULTANDO que el Abogado del Estado se opuso a la demanda, basándose en los hechos que en su escrito de contestación enumeraba y de los fundamentos de derecho que alegaba para llegar a la súplica de que se confirme en todas sus partes las resoluciones de la Dirección General de Enseñanza Primaria y Ministerio de Educación Nacional de 9 de marzo y 30 de junio de 1960, respectivamente, que denegaron al reclamante su derecho a percibir dos quinquenios a partir de primero de enero de 1960, no estimándose, por tanto, el presente recurso, la copia de este escrito fué mandada entregar al recurrente, y se señaló para fallo del recurso el 28 de febrero último;

VISTO, siendo Ponente el Excmo. señor don José María Carreras Arredondo, Magistrado del Tribunal;

Vistas las Leyes de 23 de diciembre de 1959 y 17 de julio de 1958; las Ordenes ministeriales de 28 de diciembre de 1950, en su artículo segundo, apartado primero, y de 3 de diciembre de 1957; la Orden de 15 de enero de 1952 y la Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria de 23 de octubre de 1952, y la Ley de 27 de diciembre de 1956;

CONSIDERANDO que el recurrente don Gamaniel Martínez Alvarez, después de haber estado apartado de todo servicio oficial en el Magisterio Nacional de Enseñanza Primaria desde el 27 de noviembre de 1940, en que hubo de cesar por virtud de depuración de méritos del Decreto-ley de 5 de diciembre de 1936, y demás disposiciones complementarias responsabilizadoras, no volvió al servicio activo en el Magisterio Nacional primario hasta que se resolvió su expediente de depuración readmitiéndole, y con sanciones limitativas por Orden del Ministerio de Educación Nacional de 15 de enero de 1952, posesionándose en consecuencia de su destino en 12 de agosto de dicho año, y como esa Orden ministerial no hacía constar de modo expreso que le fueran de abono ni los haberes no percibidos durante ese lapso mayor de once años ni el tiempo de servicios que no prestó a la enseñanza, de ahí que, lógicamente, el acuerdo del Centro Directivo solamente dispuso que el tiempo cursado desde su separación hasta su readmisión le fuera computado como servicios prestados a efectos administrativos, esto es, para preferencias para solicitar destinos, méritos para la provisión de vacantes, condiciones en concursos de traslados, etc., pero nunca en cuanto a efectos económicos, porque en ese caso el acuerdo de 28 de octubre de 1952 de la Dirección General de Enseñanza Primaria lo hubiera concretamente expresado o utilizado la fórmula habitual «a todos los efectos», práctica general de las disposiciones y resoluciones administrativas de esa naturaleza;

Considerando que la propia Ley de 23 de diciembre de 1959, en su artículo ter-

ceros dispone literalmente que «con efectos económicos» disfrutará el Magisterio nacional quinquenios de 1.200 pesetas anuales acumulables al sueldo «a todos los efectos». La Ley emplea, como vemos, con precisión y exactitud las fórmulas legales subrayadas, y esa ordenación encuentra cumplimiento en la Orden de 28 de diciembre de 1959, que se dió para la aplicación de la Ley, cuando dispone en su artículo segundo que para que los sea reconocido el quinquenio el interesado deberá encontrarse en situación de servicio activo y los servicios computables a tal efecto serán «exclusivamente» los que se hayan prestado en propiedad, provisional o definitiva, y precisa que se excluyan los interinos o los prestados en prácticas, pruebas u otra situación semejante, por todo lo que cuando el acuerdo del Centro Directivo citado se refiere a servicios prestados «a efectos administrativos» no cabe dar al precepto una interpretación amplia y extensiva que repele el buen sentido jurídico, pues los efectos económicos se perciben por los funcionarios públicos a manera de contrapartida de los servicios por ellos efectivamente prestados, esto es, se contraen a situaciones en activo, prestados como quiere la Ley «en propiedad ya provisional, ya definitiva», y si añade en el artículo 3.º en su párrafo segundo, de la Ley «que incluso los que deban reglamentariamente abonarse a los interesados como si fueran efectivos, aparte de que ningún precepto reglamentario se ha ofrecido que autorice el abono, las disposiciones citadas han evitado cuidadosamente reconocer tal derecho al igual que evitaron le fueran abonables al recurrente los haberes no percibidos desde que fué separado hasta que se acordó su reingreso como maestro rehabilitado;

CONSIDERANDO que no procede hacer especial declaración en cuanto a las costas del recurso;

FALLAMOS que desestimando como desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Gamaniel Martínez Alvarez, maestro nacional de Enseñanza Primaria, contra la Orden del Ministerio de Educación Nacional de 30 de junio de 1960, que dejó sin efecto el recurso de alzada que dedujo contra acuerdo de la Dirección General de Enseñanza Primaria de 9 de marzo de dicho año, por ser ajustada a Derecho, la declaramos firme y con fuerza de obligar, en cuanto que reconoció al recurrente un solo quinquenio a partir del 12 de agosto de 1952, fecha en la que reingresó en el Magisterio; absolviendo como absolvemos a la Administración central de la demanda en todas sus partes, sin hacer especial condena en las costas del recurso.

Y librese testimonio literal de esta resolución al Ministerio de Educación Nacional para que la lleve a puro y debido efecto.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Manrique Mariscal de Gante.—José María Carreras.—Francisco Camprubi (rubricado).

Publicación.—En el mismo día de su fecha, estando celebrando audiencia pública la Sala Quinta del Tribunal Supremo por el excelentísimo señor Magistrado

do Ponente en estos autos don José María Carreras Arredondo, fué dada, leída y publicada la anterior sentencia, de todo lo que como Secretario certifico.—Ramón Pajaron (rubricado).

En la Villa de Madrid a 3 de marzo de 1961. En el recurso contencioso-administrativo que en única instancia pende de resolución en esta Sala con el número general 1.453 y 197 de la Sala Quinta del año 1959: de una parte, como recurrentes, don Licerio Granados González, don Florencio García Carrasco, doña Hortensia Ibarra Granados, don Francisco Paz Lozano, don Miguel Marcio Notario, don Vidal Burgos Rodríguez, doña Dolores Prieto Olivera, doña Juana Durán Andreda, don Julio Septién Paz, don Enrique García Carrasco, don Víctor Perales Santos, doña María Luisa Jerez García, don José Rodríguez Peromingo, don Antonio Gil-Torresano Franco, don Vicente Muriel Martínez, don José Díaz Machacón, doña Pilar Cabrera Cordero, don Enrique Cerrillo Arias, doña Sacramento Ruiz Cortés, don Amancio Paz Lozano, doña Fructuosa Iniguez Martín, don Luis Rodríguez Rodríguez, don Victoriano Clemente Gutiérrez Camberos, don Fernando García Verdugo de la Guardia, doña Ángela Rosero Machacón, doña Teodora Plasencia Gijón, todos ellos mayores de edad, con Documento de Identidad y residentes en los lugares donde prestan sus servicios. De otra parte: la Administración General, representada y defendida por el Abogado del Estado. Sobre impugnación de la Orden del Ministerio de Educación Nacional de 5 de febrero de 1959, sobre provisión de Escuelas de poblaciones de más de 10.000 habitantes:

RESULTANDO que la totalidad de los Maestros citados en el anterior encabezamiento de esta sentencia, dirigieron escrito de interposición de recurso Contencioso-administrativo a este Tribunal Supremo (Sala Quinta) en el que se ratificaron en abril de 1959:

RESULTANDO que previa publicación de la interposición del recurso en el «Boletín Oficial del Estado» y de petición al Ministerio de Educación Nacional del Expediente, con contestación por tal Organismo que por tratarse de la publicación de una Orden de carácter general, no había motivado formación de expediente previo, aunque sí había originado la publicación de nueva Orden de fecha 2 de junio del mismo año 1959, se ordenó poner de manifiesto comunicación a los interesados en la Secretaría de Sala, mandándoseles formularsen la demanda en plazo de quince días:

RESULTANDO que en el plazo concedido lo verificaron únicamente: don Florencio García Carrasco (número 21.578 del Escalafón); don Enrique García Carrasco (número 23.027); don José Díaz Machacón (número 22.473) y don Enrique Cerrillo Arias (número 16.548), sentando los siguientes hechos:

Primero. Que en 5 de febrero de 1959 se publicó Orden sobre provisión de Escuelas en poblaciones de más de 10.000 habitantes. Disposición que modifica profundamente la legalidad que estaba vigente sobre la materia.

Segundo. Que considerando lesivo a sus derechos, los recurrentes, en unión de otros compañeros que ahora desisten, interpusieron contra tal Disposición recurso contencioso-administrativo, que fue tenido por interpuesto por providencia de la Sala Quinta de 23 de junio de 1959.

Tercero. «Que por providencia del 29 de septiembre último se nos emplazó por quince días para deducir la demanda correspondiente, como lo hacemos, dentro, por tanto, del plazo concedido.»

Cuarto. Don Florencio García Carrasco tiene ganadas las oposiciones (o concurso oposición) a localidades de más de 10.000 habitantes convocadas en 1946 y 1950; los otros tres comparcientes tienen aprobadas las convocadas el año último,

según demuestran las hojas de servicio que se unieron al escrito interponiendo el recurso y las certificaciones que se acompañan. Al aprobarlas con anterioridad al Decreto impugnado, es claro que adquirieron los derechos correspondientes reconocidos por la legislación en vigor, siendo por ello gravemente perjudicados por el Decreto de febrero de 1959; como fundamentos de Derecho aducen sustancialmente: que el citado Decreto de 5 de febrero de 1959 es discordante del artículo 87 de la Ley de Enseñanza Primaria de 17 de julio de 1945 modificándole en su perjuicio a pesar de ser aquella Ley disposición de superior rango. Termina la demanda con la súplica de que se dicte sentencia con los siguientes pronunciamientos:

Primero. Que el Decreto de 5 de febrero de 1959 sobre provisión de Escuelas Nacionales en poblaciones de más de 10.000 habitantes, no es ajustado a Derecho, procediendo, en consecuencia, su anulación a todos los efectos legales.

Segundo. Subsidiariamente, si no se accediera a lo anteriormente solicitado, que se declare la nulidad de los artículos 1.º y 15 del mencionado Decreto de 5 de febrero de 1959.

Tercero. En todo caso, que se reconozca el derecho de los recurrentes a participar en el concurso especial regulado en el artículo 57 del Estatuto del Magisterio Primario, según su texto de 28 de marzo de 1953, con expresa condena de la Administración a tomar las medidas necesarias conducentes a dar plena realidad al ejercicio del derecho que se reconoce. Cuarto. Condenar a la Administración en costas si estimaren concurrentes las circunstancias del artículo 131 de la Ley de lo contencioso:

RESULTANDO que dado traslado de la demanda al Abogado del Estado, para su contestación en nombre y representación de la Administración General lo efectuó afirmando como hechos: Que el Ministerio de Educación Nacional reguló los concursos oposiciones para cubrir Escuelas Nacionales de Enseñanza Primaria en poblaciones de más de 10.000 habitantes, dictando al efecto el Decreto de 5 de febrero de 1959 a virtud de las atribuciones que le otorgaba el artículo 87 de la Ley de 17 de julio de 1945; que contra tal Decreto de 1959, don Licerio Granados González y veinticinco personas más (todas ellas Maestros Nacionales), interpusieron recurso contencioso-administrativo; que verificada la tramitación procesal pertinente se las señaló el plazo de quince días para la formalización de la demanda, verificándolo tan sólo: don Florencio García Carrasco, don Enrique García Carrasco, don José Díaz Machacón y don Enrique Cerrillo Arias, que acreditaron tener aprobado el concurso-oposición para poder concurrir plazas de poblaciones de más de 10.000 habitantes; que acepta los hechos de la demanda en cuanto se ajusten a lo constatado en los de la contestación. Como fundamentos de Derecho sustancialmente los artículos 57 y 58 de la Ley de Instrucción Primaria de 17 de julio de 1945:

RESULTANDO que solicitado por la representación de los cuatro recurrentes el recibimiento a prueba y por la Administración la acumulación de este recurso a 1.445, ambas pretensiones fueron desestimadas sin que contra tales denegaciones se formularse ninguna nueva pretensión, como tampoco la han formulado los veinticinco señores Maestros que firmaron el escrito de interposición del recurso contencioso y después no formalizaron la demanda ni alegaron causa alguna de ello:

RESULTANDO que por providencia de 31 de enero del presente año 1961 se señaló el día 24 de febrero inmediato para la votación y fallo del recurso:

VISTO, siendo Ponente el Magistrado don Angel Villar y Madruéño:

Vistos los artículos 28 a 32, 57, 58, 87 a 84 y 131 de la Ley de lo contencioso-administrativo de 27 de diciembre de 1956:

Vista la Ley de Instrucción Primaria de 17 de julio de 1945:

Vistos el Estatuto del Magisterio, aprobado por Decreto de 24 de octubre de 1947 y el Decreto de 28 de marzo de 1952, por el que se modifican varios artículos del indicado Estatuto:

Visto el Decreto de 5 de febrero de 1959 referente a provisión de Escuelas de poblaciones de más de 10.000 habitantes y su rectificación por el de 2 de junio del mismo año 1959:

Vista la sentencia de esta Sala Quinta, de 7 de enero de 1960:

CONSIDERANDO que son varias y de distintos matices las cuestiones que suscitan los litigantes de este recurso para su estudio y resolución, lo que determina la exigencia de una sistemática ordenación, que evite la omisión de la contemplación completa de toda las pretensiones de las partes que impone el párrafo primero del artículo 43 de la Ley de la Jurisdicción de 27 de diciembre de 1956, sean examinadas. Con esta norma orientadora resultan ser problemas a estudiar y definir:

Primero. Previo de tipicidad procesal, dimanante de la interposición del recurso contencioso-administrativo por veintiséis señores Maestros y de la mera formalización del mismo y prosecución del litigio solamente por cuatro de ellos.

Segundo. De fondo: a) Si el Decreto de 5 de febrero de 1959 (rectificado por el de 2 de julio del mismo año), total o parcialmente no se ajustan a Derecho, y caso de apreciarse así, si es procedente la declaración de nulidad total de ellos o meramente la inaplicabilidad de los artículos 1.º y 15 en cuanto afecten a los demandantes; b) si es de acceder a la pretensión de los recurrentes que solicitan participar en un concurso especial regulado por el artículo 57 del Estatuto del Magisterio de 1947, según la redacción que le dio el Decreto de 28 de marzo de 1952.

Tercero. Accesorio: Si es de efectuar expresa imposición de costas:

CONSIDERANDO que de los veintiséis litigantes que interpusieron este recurso contencioso-administrativo, solamente cuatro: don Florencio García Carrasco, don Enrique García Carrasco, don José Díaz Machacón y don Enrique Cerrillo Arias, formularon la demanda, que para la prosecución del recurso era precisa, e indispensable lo realizasen en el plazo de quince días que les fijaba la providencia de 26 de septiembre de 1959, con efectividad del siguiente día al del 29 del mismo mes, en que les empezaba a correr el plazo hábil para realizarlo; y al no haberlo ejecutado don Licerio Granados González y los otros veintidós Maestros, que se relacionarán específicamente en el fallo de esta sentencia, han incidido en la caducidad de la instancia. Que ésta fue ya conceptuada y estructurada por la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en sus sentencias de 26 de junio de 1911 y 9 de abril de 1913; «como la inactividad voluntaria del litigante en el proceso, que le obliga si desea el restablecimiento de sus derechos administrativos, a la nueva interposición del mismo, si aún no ha prescrito la acción» y este es el caso de autos, que obliga a tener por caducada la instancia para los veintidós señores Maestros antes aludidos, pues así lo determina el párrafo 2.º del artículo 67 de la Ley Jurisdiccional, en el que se preceptúa si la demanda no se hubiese presentado en el plazo concedido para ello, se declarará de oficio caducado el recurso». Porque la intervención adhesiva aún en la Ley Contencioso-administrativa, que es la más avanzada procesalmente, admitiendo desde 1894 la figura del coadyuvante, impone siempre que todo el que intervenga en el proceso lo haga, por habersele vulnerado directa o indirectamente sus derechos, no llegando a aquel amplio espíritu de la Ley IV del Título XXIII de la Partida 3.ª, que ins-

titula que en el pleito podían intervenir uno sólo los señores de los pleitos), sino aquellos «a quienes pertenece la pro o el daño que viniere del juicio; por lo cual es imprescindible la declaración de caducidad, antes apuntada, relativa a la prosecución de este recurso, por los veintidós Maestros reiteradamente aludidos:

CONSIDERANDO que la cuestión de fondo del litigio se contrae a si los cuatro recurrentes que han proseguido el recurso formalizando en tiempo su conjunta demanda y han acreditado estar aprobados en concurso-oposición a Escuelas de población de más de 10.000 habitantes, han sido lesionados en sus derechos con la publicación del Decreto del Ministerio de Educación Nacional de 5 de febrero de 1959 rectificado por la disposición de igual rango de 2 de junio del mismo año, pues estiman los accionantes, que tales Decretos vulneran lo preceptuado en el artículo 87 de la Ley de Instrucción Primaria de 17 de julio de 1945. Tesis que mantienen los cuatro señores (que continúan siendo recurrentes) por estimar que según el texto del citado artículo la tercera parte de las vacantes que se originen en poblaciones de más de 10.000 habitantes han de ser provistas meramente, mediante concurso oposición, y si ello es cierto no lo es menos que en el mismo primer párrafo de tal artículo, se preceptúa «Las modalidades de estos procedimientos y los turnos en cada caso, serán objeto de especial reglamentación en el Estatuto del Magisterio»:

CONSIDERANDO que partiendo de tal precepto de verdadera atribución potestativa, al Ministerio de Educación Nacional, en el transcurso del tiempo que han sido dictadas varias disposiciones legales en las que no se reconoce el pretendido derecho excluyente a los ingresados en el Magisterio Nacional, de ser ellos los que han de ir ocupando los puestos de las escalas superiores en su tercera parte; directriz que tuvo ya manifestación en el Estatuto del Magisterio aprobado por Decreto de 24 de octubre de 1947, pues en él y en su artículo 51 se determina módulo especial para proveer la totalidad de vacantes producidas hasta 31 de diciembre anterior que hayan de proveerse en localidades de más de 10.000 habitantes, precepto que a su vez fue modificado por el Decreto de 28 de marzo de 1952 que reformó el texto de varios artículos del Estatuto del Magisterio de 1947, y entre ellos el artículo 57, cuyo texto actual dice: «La tercer parte de las vacantes de cada localidad de régimen general de provisión, desiertas y resultas del concursillo, en poblaciones de más de 10.000 habitantes, se proveerán por concurso oposición entre Maestros en activo que cuenten, por lo menos, dos años de servicios efectivos en propiedad en Escuela Nacional. Se seguirá el procedimiento señalado en el artículo 67 para concretar las plazas que han de cubrirse por este procedimiento. Antes de convocar el concurso-oposición, se anunciarán las vacantes a concurso especial de traslado entre los Maestros que hayan aprobado el concurso-oposición a plazas de censo superior a 10.000 habitantes, utilizándose los mismos medios de selección y colocación que en el concurso general de traslado. Las desiertas y resultas del concurso especial se anunciarán al concurso-oposición»:

CONSIDERANDO que con el mismo criterio orientador, que señaló con trazo profundo y rectilíneo la última parte del artículo 87 de la Ley de Instrucción Primaria, transcrito en el anteprecedente Considerando, se dictó el impugnado Decreto de 5 de febrero de 1959, rectificado por el de 2 de junio del mismo año, pues en el preámbulo de esta rectificación sin desdecirse de lo que se afirmó en el texto primitivo (o sea, en el de 5 de febrero), en el que se consignaba «Se aspira con todo este cuadro de medidas a estimular el ingreso en el Magisterio y a dar más eficacia al sistema de selección para los

mejores destinos, con objeto de premiar la vocación, la aptitud y la dedicación a la enseñanza primaria» concreta y aclara su propósito y finalidad el Ministro rector del Ministerio de Educación Nacional consignando en el párrafo tercero del preámbulo del texto rectificado «sin alterar, por ahora al menos, los módulos de distribución de vacantes que, a efectos de provisión, establecen el Estatuto del Magisterio Nacional Primario en su artículo 57 y el artículo 11 del Decreto de 18 de octubre de 1957, se introducen, por lo que se refiere a la proporción de vacantes destinadas a concurso-oposición y concurso restringido, el principio de ingreso directo en las Escuelas de poblaciones importantes. Habrá así una doble posibilidad de ingreso en el Magisterio Nacional. Las oposiciones ordinarias, cuyo régimen no se reforma en este Decreto, y unas oposiciones especiales para ingreso en poblaciones de más de 10.000 habitantes, a las que podrán concurrir también quienes ya estuvieran en el Magisterio.» Lo cual es expresamente sancionado en el artículo 1.º de este texto rectificado, en el que transcrito literalmente se lee: «Artículo 1.º. La tercera parte de las Escuelas de régimen general de provisión vacantes en poblaciones de más de 10.000 habitantes, incluidas en ellas las de nueva creación, a las que se refieren el artículo 57 del Estatuto del Magisterio y el artículo 11 del Decreto de 18 de octubre de 1957, se proveerán en la siguiente forma: De cada seis vacantes, la primera, tercera y quinta se proveerán por concurso-oposición restringido entre Maestros Nacionales; la segunda y la cuarta por concurso restringido, y la sexta, mediante concurso-oposición especial directo y libre de ingreso en el Magisterio. No hay disminución de plazas para los Maestros que aspiran a diezmilistas, sino nueva ordenación de los derechos especiantes que creían tener con criterio acertadamente calificado en sentencia ed esta Sala de 7 de enero del pasado año 1960 de motivos que les lleva a los señores recurrentes a un desconocimiento de la naturaleza superior a las facultades del Estado para modificar el régimen de ingreso y promoción en el Magisterio, máxime cuando por Ley votada en Cortes y refrendada por el Jefe del Estado, se halla el Ministro del ramo autorizado para ello y lo efectúa sin causar lesión ni general, ni concreta para los Maestros que aspiran a alcanzar las plazas en poblaciones de más de 10.000 habitantes, dándoles facilidades para que los que demuestren un mayor amor a la enseñanza puedan anteponerse a los escalafonistas del sistema de antigüedad a ultranza que suelen ser los pocos animosos para el estudio o los menos competentes»:

CONSIDERANDO que la última pretensión de los cuatro recurrentes actuales es la de que, se les conceda participar en un concurso especial regulado por el artículo 57 del Estatuto del Magisterio de 1947, según la redacción que a tal artículo le dio el Decreto de 28 de marzo de 1952. Tal pretensión tiene una tipicidad de petición puramente administrativa, es decir, que debieron los recurrente dirigirla al Ministerio de Educación Nacional, para que este resolviera positiva o negativamente, generase un acto administrativo factible de revisión ante esta jurisdicción. Al no efectuarlo así, ha habido, por parte de los recurrentes, una desviación procesal, que impide la revisión»:

CONSIDERANDO que no siendo notoria la temeridad ni la mala fe de los recurrentes no ha lugar a hacer expresa imposición de costas:

FALLAMOS: Primero. Que debemos declarar y declaramos la caducidad de este recurso para los recurrentes: don Licerio Granados González, doña Hortensia Ibarra Granado, don Francisco Paz Lozano, don Miguel Marcelo Notario, don Vidal Burgos Rodríguez, doña Dolores Prieto Olivera, doña Juana Durán Andrada, don Julio Sepúlveda Paz, don Víctor Ferrales

Santos, doña María Luisa Jerez García, don José Rodríguez Peromínz, don Antonio Gil-Toresano Franco, don Vicente Muneí Martínez, doña Pilar Cabrera Corchero, doña Sacramento Ruiz Cortés, don Amancio Paz Lozano, doña Fructuosa Iñiguez Martín, don Luis Rodríguez Rodríguez, don Victoriano Clemente Gutiérrez Camberos, don Fernando García Verdugo de la Guardia, doña Ángela Rasero Machacón, doña Teodora Plasencia Giljón.

Segundo. Que por estar ajustado a Derecho el Decreto de 5 de febrero de 1959, dictado por el Ministerio de Educación Nacional en relación a la provisión de Escuelas en poblaciones de más de 10.000 habitantes, debemos así mismo declarar y declaramos, desestimado el recurso interpuesto por don Florencio García Carrasco, don Enrique García Carrasco, don José Díaz Machacón y don Enrique Cerrillo Arias, contra el citado Decreto que declaramos firme y subsistente.

Tercero. Que debemos absolver y absolvemos a la Administración General del Estado de la totalidad de pretensiones formuladas y mantenidas en este recurso, por los dichos señores Maestros don Francisco García Carrasco, don Enrique García Carrasco, don José Díaz Machacón y don Enrique Cerrillo Arias.

Cuarto. Que no ha lugar a hacer expresa imposición de costas en este recurso.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Manrique Mariscal de Gante; Juan de los Ríos; Angel Villar (rubricados).

Publicación.—En el mismo día de su fecha, estando celebrando audiencia pública la Sala Quinta del Tribunal Supremo por el Excmo. señor Magistrado Ponente en estos autos, don Angel Villar y Madrufo, fue dada, leída y publicada la anterior sentencia, de todo lo que como Secretario, certifico. — Ramón Pajarón (rubricado).

En Madrid a 3 de marzo de 1961, en el recurso contencioso-administrativo que en única instancia pende ante esta Sala con el número 196 de ella, entre partes: Don Fausto Paredes Terrón, Capitán de Infantería retirado por edad, defendido y representado por el Abogado don Jerónimo Esteban González, contra la Administración General, defendida por el Abogado del Estado, sobre revocación de la resolución del Consejo Supremo de Justicia Militar de 19 de noviembre de 1959, relativa a señalamiento de haber pasivo, confirmada el 26 de enero de 1960, al desestimar el recurso de reposición interpuesto contra la misma:

RESULTANDO que del expediente precursor de este recurso contencioso-administrativo aparece que don Fausto Paredes Terrón, Capitán de Infantería E. C., pasa a la situación de retirado el 20 de septiembre de 1959 por cumplir la edad reglamentaria, que ingresó en el Servicio el 1 de marzo de 1925, ascendiendo a Sargento en 1 de diciembre de 1929 y a Oficial el 11 de abril de 1940; que por ello, según el informe del Fiscal Militar de 15 de octubre de 1959, le corresponde un haber pasivo mensual de 3.653,74 pesetas, 90 por 100 del total regulador que estimaba en 4.059,71 pesetas, a cuyo haber se le acumularía la pensión mensual de 800 pesetas por la Placa de la Orden de San Hermenegildo, con lo cual estuvo conforme la acordada del Consejo Supremo de Justicia Militar:

RESULTANDO que don Fausto Paredes Terrón, en 14 de diciembre de 1959, interpuso recurso de reposición por estimar, que por llevar más de doce años en el empleo de Capitán le corresponde percibir, de conformidad con el artículo 12 de Clases Pasivas, un 10 por 100 más. Recurso de reposición que fué resuelto por el

nombrado Consejo Supremo de Justicia Militar denegatoriamente, previo informe del Fiscal, en 26 de enero de 1960:

RESULTANDO que a la vista de la resolución negativa del recurso de reposición, don Fausto Paredes Terrón, en tiempo y forma presentó ante esta Jurisdicción en 7 de abril de 1960, escrito por el que interponía recurso contencioso-administrativo, y publicado el anuncio de ello en el «Boletín Oficial del Estado» y reclamado y recibido el expediente se le puso de manifiesto, a virtud de providencia de 27 de mayo del citado año, para que en plazo de quince días formulase la demanda:

RESULTANDO que con la firma del Letrado don Jerónimo Esteban González lo realizó en tiempo legal, reproduciendo en síntesis los hechos y fundamentos de Derecho en que había basado su recurso de reposición. Concretando al estimar serie de aplicación el título primero del Estatuto de Clases Pasivas promulgado por Real Decreto de 22 de octubre de 1926 y no el título segundo como equivocadamente, a su juicio, aplica la Administración; lo que prolijamente le lleva a la petición de que se dicte sentencia de que al recurrente le corresponde a más de la pensión de la Placa de San Hermenegildo se le ha de abonar no solamente el 90 por 100 del haber regulador, sino un 10 por 100 más del mismo:

RESULTANDO que el Abogado del Estado, en nombre de la Administración General, aceptó los hechos de la demanda en cuanto reflejan lo que consta en el expediente administrativo. En los fundamentos de Derecho considera está fuera de toda duda la aplicación al presente caso del título segundo de Clases Pasivas, pues para ser de aplicación el primero era necesario que el actor se hubiera retirado dentro de la categoría de Suboficial o Sargento, pero no con la de Capitán como lo ha hecho. A virtud de tal argumentación concluye su contestación a la demanda, con la pretensión de que se dicte sentencia desestimando las pretensiones todas del actor por estar ajustadas a Derecho las resoluciones del Consejo Supremo de Justicia Militar, que fijó los haberes pasivos de don Fausto Paredes Terrón:

RESULTANDO que por auto de 9 de diciembre de 1960 se denegó el recibimiento a prueba que había solicitado la representación de la parte actora, y seguida la tramitación se señaló el día 28 de febrero para la votación y fallo del recurso:

VISTO, siendo Ponente el Magistrado don Angel Villar y Madrueno:

Vistos los artículos 53, 57, 58, 81 a 84 y 131 de la Ley de lo Contencioso-administrativo de 27 de diciembre de 1956:

Visto el Estatuto de Clases Pasivas aprobado por Real Decreto de 22 de octubre de 1926, ratificado como Ley por la de 22 de abril de 1931 y el Reglamento para su aplicación promulgado por Real Decreto de 21 de noviembre de 1927:

Vista la Ley de 23 de diciembre de 1948, que modificó el texto de la disposición transitoria segunda del Estatuto de Clases Pasivas:

Vistas las sentencias de esta Sala de 15 de enero, 15 de abril y 17 de junio de 1959:

CONSIDERANDO que la cuestión fundamental que se plantea en este recurso a los efectos de la clasificación de haberes pasivos es la de determinar si al recurrente es de aplicarle el título primero del Estatuto de Clases Pasivas del Estado o bien el título segundo de tal Cuerpo legal, ya que en el primer caso le correspondería el 100 por 100 de su haber, como él pretende, mientras que en el segundo supuesto se le aplicaría la Ley de 13 de diciembre de 1943 para que lo frase el 90 por 100 de su actual empleo:

CONSIDERANDO que teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo primero del párrafo cuarto de la Ley de 23 de

diciembre de 1948, los ingresados en filas antes de 1 de enero de 1927, que con posterioridad a dicha fecha hayan prestado servicio de Suboficiales, Sargentos, personal asimilado o equiparado a estas clases del Ejército y de la Armada y después oblangan o hayan obtenido empleo superior en su carrera, causarán pensiones de retiro con arreglo al título segundo del Estatuto de Clases Pasivas de 1926 aún vigente, y como don Fausto Paredes Terrón ingresó en el Ejército en 1925, habiendo ascendido a Sargento con posterioridad a la fecha de 1 de enero de 1927 y a Alférez en 1940, quedó comprendido por estos hechos en la norma citada que modificó la disposición transitoria segunda del Estatuto, no alcanzándole por ello los beneficios del artículo 12 del Estatuto aludido, a pesar de llevar doce años de servicios, pues el citado artículo y los beneficios que por su aplicación se pueden obtener es tan sólo para los empleados militares a los que les sean los preceptos del título primero de factible adaptación:

CONSIDERANDO es suficiente para desestimar el recurso interpuesto por el Capitán don Fausto Paredes (cualesquiera que sea el tiempo que lleve disfrutando el mentado empleo), lo razonado en las procedentes consideraciones:

CONSIDERANDO que no siendo de apreciar en el recurrente temeridad ni mala fe, no es procedente la imposición de costas:

FALLAMOS que debemos declarar y declaramos desestimado el recurso interpuesto por el Capitán retirado don Fausto Paredes Terrón contra las acordadas del Consejo Supremo de Justicia Militar de 19 de noviembre de 1959 y la desestimatoria del recurso de reposición de 26 de enero de 1960 por estar ambas resoluciones ajustadas a Derecho, confirmando, por tanto, ser el haber que le corresponde el 90 por 100 del básico determinado como regulador, incrementado con la pensión de la Placa de San Hermenegildo que viene disfrutando; no habiendo lugar a la imposición de costas:

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Manrique Mariscal de Gante.—Manuel B. Cervia.—Angel Villar. (Rubricados.)

Publicación.—Fue leída y publicada la anterior sentencia por el excelentísimo señor Magistrado, Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el mismo día de su fecha.—Certifico. Isidro Almonacid. (Rubricado.)

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION

BARCELONA

En virtud de lo acordado por el ilustrísimo señor Juez de Primera Instancia número 1 de los de esta ciudad en providencia del día de hoy, dictada en el procedimiento judicial sumario de la Ley Hipotecaria promovido por el Procurador don Ramón Barbany en nombre y representación de don Luis Armengol Vallduvi contra don Sixto Moreno Barrionuevo y doña Esther Pascual Morato, por el presente se anuncia la venta en pública subasta por segunda vez, término de veinte días y precio que se dirá, de la siguiente

Finca: Porción de terreno de superficie 156,90 metros cuadrados, equivalentes a 4,152 décimos de palmo cuadrado, y en la que existe edificada una casa, que consta de planta baja destinada a tienda o almacén, tres pisos altos dobles con 114 metros cuadrados por planta, un ático de 80 metros cuadrados y un sobrecático; situada en el término de Hospitalet de Llobregat, hoy en su calle de la Florida, donde está señalada con el número 81. Lindante: Por el Norte, frente, con dicha calle de la Florida; por el Sur, con don Julio Peris

López, y por el Este, parte con don Agustín Amisó y parte con dicho don Julio Peris López, y por el Oeste, con la Compañía Riegos y Fuerza del Ebro, S. A.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Hospitalet, antes de San Feliu de Llobregat, al folio 74 del tomo 1.245 del archivo, libro 167 de Hospitalet, finca 7.063, inscripción primera.

Valorada dicha finca escriturariamente en la cantidad de 600.000 pesetas.

Para la celebración del remate, que tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, sito en los bajos, a la derecha, del Palacio de Justicia (Salón de Victor Pradera, s/n), se ha señalado el día 28 de mayo próximo venidero y hora de las once, y se hace saber a los señores licitadores:

Que dicha finca sale a subasta por el 75 por 100 del precio de valoración anteriormente consignado; que no se admitirán posturas que no cubran dicho tipo de subasta; que podrán hacerse posturas a calidad de ceder el remate a tercero; que los autos y la certificación del Registro a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en Secretaría, entendiéndose que todo licitador acepta como bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes —si los hubiere— al crédito del actor continuarán subsistentes, entendiéndose asimismo que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate, y que para poder tomar parte en la subasta deberán consignar previamente en la mesa del Juzgado o en el establecimiento destinado al efecto una cantidad igual por lo menos al 10 por 100 efectivo del tipo de ella, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Barcelona, a 2 de abril de 1963.—El Secretario, Martín Escalza.—2.446.

MADRID

En el Juzgado de Primera Instancia número diez de esta capital, sito en el Palacio de los Juzgados, calle del General Castaños, número uno, se sigue el expediente de suspensión de pagos promovido por doña Josefa Alarcón Galian, comerciante en esta plaza, como propietaria de un negocio de venta al por mayor, almacén y molinera de pimentón y especias, sito en la calle de San Vicente Ferrer, números 20 y 22, que gira a nombre de «Viuda de Fernando Hernández», en cuyo expediente por auto de esta fecha ha sido declarada en estado legal de suspensión de pagos la expresada señora doña Josefa Alarcón Galian y señalada para la celebración de la Junta general de acreedores que preceptúa el artículo 8.º de la Ley de Suspensión de Pagos, de 26 de julio de 1922, el día seis de junio próximo y hora de las diez y media, en la Sala Audiencia de dicho Juzgado número diez.

Lo que se hace público por el presente para conocimiento de los acreedores de la suspensa que no figuren en las relaciones unidas a los autos, los cuales se hallan de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado para que puedan ser examinadas por los acreedores, haciéndose presente a los mismos que si han de hacer uso de la facultad que concede el artículo 11 de la Ley de Suspensión de Pagos deberán efectuarlo dentro del plazo que dicho artículo determina.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», se expide el presente en Madrid a veintiséis de marzo de mil novecientos sesenta y tres.—El Juez de Primera Instancia (ilegible).—Visto bueno, el Secretario (ilegible).—1.354.

En virtud de providencia dictada en este día por el señor Juez de Primera Instancia número 3 de esta capital en los autos de procedimiento de la Ley de Hipo-

teca Naval, promovidos por la Caja Central de Crédito Marítimo y Pesquero contra don Evaristo Basarrete Iradi, sobre reclamación de cantidad, se saca a la venta en pública y primera subasta en quiebra y término de veinte días la embarcación embargada a dicho demandado, denominada «Dulcinea», de casco de madera y siguientes dimensiones: Eslora, 17,60 metros; manga, 5,20 metros; puntal, 2,40 metros. Tonelaje total R. B. 44,54 toneladas. Descuentos, 20,59 toneladas. Neto, 23,95 toneladas. Lleva instalado un motor Duvant-Unanue, de 11,06/150 H. P., así como todos los pertrechos y artes de la nave, que se encuentra depositada en poder del propio don Evaristo Basarrete, que tiene fijado como su domicilio la Cofradía de Pescadores de la Ciudad de Vigo.

Para que tenga lugar la citada subasta, que se celebrará doble y simultáneamente en la Sala Audiencia de este Juzgado, sita en la calle del General Castañón, número 1, y en el de igual clase que correspondía de Vigo, se ha señalado el día 16 de mayo próximo a las once de la mañana, advirtiéndose a los licitadores:

Primero.—Que no se admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes de la cantidad de 550.000 pesetas, que es el fijado en la póliza base de los autos.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta deberán consignar previamente una cantidad igual por lo menos al 10 por 100 de la expresada, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercero.—Que no han sido suplidos los títulos de propiedad, por lo que el rematante deberá suplirlos a su costa, y que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate.

Madrid, 26 de marzo de 1963.—El Secretario (ilegible).—1.872.

En virtud de lo acordado por el ilustrísimo señor Magistrado-Juez de Primera Instancia número 4 de Madrid, en autos de procedimiento sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, promovidos por doña Vicenta Méndez Lorenzo, representada por el Procurador don Manuel del Valle Lozano, contra don Jesús Domínguez Herrero, sobre pago de cantidad, se acordó a instancia de la parte actora sacar a pública subasta por segunda vez y con la rebaja del veinticinco por ciento del tipo de valoración que sirvió para la primera, la finca objeto de hipoteca y que a continuación se expresa, habiéndose señalado para que tenga lugar dicha subasta doble y simultáneamente en la Sala-Audiencia de este Juzgado y en el de igual clase Decano de los de Zaragoza, el día tres de junio próximo y hora de las doce de la mañana:

Solar edificado en la ciudad de Zaragoza y su calle de avenida del General Moia, número 74 duplicado. Ocupa una superficie de 1.420 metros cuadrados 96 decímetros cuadrados, y linda: Norte, Jesús Domínguez; Sur, Eduardo Portabella; Este, Emilia y Manuel Abizanda, y Oeste, Tomás Bayod. Sobre dicha finca se ha construido las siguientes edificaciones con materiales propios: Tres naves cuya superficie ocupa todo el terreno, excepto una casa de dos plantas edificada en una esquina del terreno. Dichas naves son diáfanas de un solo piso y su construcción es de hormigón armado y ladrillo. Inscrita la agrupación y obra nueva al tomo 2.111, libro 906, sección segunda, folio 93, finca 39.591, inscripción primera.

La subasta se celebrará bajo las condiciones siguientes:

1.ª Para tomar parte en la misma deberán los licitadores consignar previamente en la mesa del Juzgado o establecimiento destinado al efecto el 10 por 100 del tipo, con la rebaja del 25 por 100, sin cuyo requisito no serán admitidos.

2.ª Que los autos y la certificación del Registro están de manifiesto en la Secretaría; que se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación y que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes—si los hubiere—al crédito del actor continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos sin destinarse a su extinción el precio del remate.

3.ª Que el tipo de subasta es el de novecientas mil pesetas, una vez rebajado el 25 por 100 del que sirvió para la primera, y no se admitirá postura alguna que sea inferior a dicho tipo; y que podrán hacerse a calidad de ceder el remate a un tercero.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» con la antelación debida, expido el presente con el visto bueno del señor Magistrado-Juez, que firmo en Madrid a primero de abril de mil novecientos sesenta y tres.—El Secretario (ilegible).—Visto bueno, el Magistrado-Juez (ilegible).—2.410.

Don Rafael Gimeno Gamarra, Magistrado-Juez de Primera Instancia número cuatro de Madrid.

Hago saber: Que en este Juzgado de mi actuación se sigue de oficio expediente de declaración de herederos abintestato por fallecimiento de doña Manuela Alonso Abascal, mayor de edad, hija de Victor y de Antonia, nacida en Madrid el año 1884, y fallecida en esta capital el día 11 de mayo de 1962.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 986 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por medio del presente se anuncia su muerte intestada, llamando a los que se crean con derecho a la herencia, para que comparezcan ante este Juzgado a reclamarlo dentro de treinta días.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» expido el presente en Madrid a tres de abril de mil novecientos sesenta y tres.—El Juez de Primera Instancia, Rafael Gimeno Gamarra.—El Secretario (ilegible).—1.070.

En virtud de providencia dictada en el día de hoy por el ilustrísimo señor don Rafael Gimeno Gamarra, Magistrado y Juez de Primera Instancia número 4 de esta capital, en los autos de juicio ejecutivo que se siguen en dicho Juzgado número 4, promovidos por el Procurador don Eduardo Castro y García Patón, en nombre y representación de don Fernando de Aburto Bengoechea, contra doña Adela Bermejo Garnica, declarada en rebeldía, sobre pago de cantidad, intereses, gastos de protesto y costas, se sacan a la venta en pública subasta, que se celebrará por segunda vez en la Sala Audiencia de este Juzgado el día 30 del actual, a las trece y media horas, y con la rebaja del 25 por 100 del tipo que sirvió para la primera, o sea por el tipo de un millón ciento veinticinco mil pesetas, los derechos de traspaso del local destinado a sala de fiestas «Tropicana», antes «Samba», sito en la calle Arturo Soria, número 21, de esta capital, que han sido embargadas a la demandada.

Y se advierte a los licitadores que para tomar parte en la subasta deberán consignar previamente sobre la mesa del Juzgado o establecimiento destinado al efecto del 10 por 100 del expresado tipo; que no se admitirá postura alguna que no cubra por lo menos las dos terceras partes del mismo; que se podrá hacer a calidad de ceder el remate a un tercero, y se advierte además a dichos licitadores que la aprobación de su remate quedará en suspenso hasta que transcurra el plazo de treinta días que establece el artículo 35 de la Ley de Arrendamientos Urbanos para

el ejercicio de tanteo por la propiedad de la finca, que empezará a contarse a partir del día siguiente al en que se le haga, saber la notificación del precio ofrecido, y que el rematante contrae la obligación de permanecer en el local sin traspasarlo el plazo mínimo de un año y destino, durante ese tiempo, por lo menos, al negocio de la clase que en él se viene ejerciendo.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» con la antelación debida, a los fines y efectos prevenidos en la Ley, expido el presente, que firmo con el visto bueno del señor Juez en Madrid a 3 de abril de 1963.—El Secretario (ilegible).—El Juez de Primera Instancia, Rafael Gimeno Gamarra.—1.883.

ORDENES

Don Martín Otero Fernández, Juez de Primera Instancia de la villa y partido de Ordenes.

Hago público: Que en este Juzgado y a instancia de Manuel López Mosquera, casado, labrador y vecino de la parroquia de Ledoira, Municipio de Frades, se tramita expediente sobre declaración de fallecimiento de Tomás López Mosquera, hijo de José y de Dolores, que tuvo su último domicilio en la parroquia de Aña, Municipio de Frades, de la que se ausentó hace más de treinta años.

Dado en Ordenes a 11 de agosto de 1962.—El Secretario (ilegible).—El Juez de Primera Instancia (ilegible).—1.444.
y 2.ª 10-4-1963

TARRASA

Por el presente se hace público que en el Juzgado de Primera Instancia de Tarrasa, y a instancia del Procurador de los Tribunales don Carlos Fages Solá, se tramita expediente de suspensión de pagos de su representado, don Manuel Valero Valero, titular del negocio comercial que gira bajo el nombre de «M. Valero Valero», y que por auto de esta fecha se le declara en estado de suspensión de pagos por ser el activo superior al pasivo y en el de insolvencia provisional, y se convoca a Junta general de acreedores, que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en la calle de S. Quirico, 2, esquina Baldrich, el día 24 de mayo próximo, a las once de la mañana.

Tarrasa, 25 de marzo de 1963.—El Secretario Judicial (ilegible).—1.881.

REQUISITORIAS

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y de incurrir en las demás responsabilidades legales de no presentarse los procesados que a continuación se expresan en el plazo que se les fija, a contar desde el día de la publicación del anuncio en este periódico oficial, y ante el Juzgado o Tribunal que se señala, se les cita, llama y emplaza, encargándose a todas las autoridades y Agentes de la Policía Judicial procedan a la busca, captura y conducción de aquellos, poniéndolos a disposición de dicho Juez o Tribunal, con arreglo a los artículos correspondientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Juzgados Militares

SANCHEZ, SANCHEZ, Clemente; de veintisiete años, casado, albañil, natural de Madrid, hijo de Clemente y Benita, domiciliado en Entrevías (Vallecas), Esperanza, Bloque 4, de mediana estatura, color del pelo castaño, color de las cejas castaño, ojos castaños, nariz regular, boca regular, barba poblada, frente despejada, aire marcial, color sano, cara redonda, apodado alias «El Higuero», con una cicatriz pequeña en el carrillo derecho; procesado por robo; comparecerá en el término de veinte días ante el Juez instructor don Abraham Sanz Guijarro, Capitán de Ingenieros del Regimiento de la Red permanente y Servicios Especiales de Transmisiones.—(835.) y 2.ª 10-4-1963